

un problema de la radio y la TV argentinas

• TOMAS PANTIN

COMPARATIVAMENTE con otros países, el nuestro no ocupa una situación destacada en lo que respecta a cantidad de emisoras de radiotelefonía y televisión; y menos aún que éstas cubran eficientemente el enorme y a veces inerte territorio nacional (caso de las fronteras). Al mismo tiempo el sistema legal y práctico de su administración no responde a necesidades ni realidades de empresa u organismo oficial.

No recurriremos a estadísticas de cifras nacionales, ni al cotejo de ellas con las correspondientes a países extranjeros, pero realmente el problema que se nos plantea en la Argentina es grave y urgente.

Hay una zona geográfica, como en casi todos nuestros demás aspectos, en la que se concentra la masa de emisoras comerciales y oficiales de radiotelefonía de largo alcance y cabeceras a su vez de las cadenas privadas y redes oficiales.

Al mismo tiempo se centra en esa misma zona de la Capital Federal el núcleo fundamental de la televisión, los 4 canales principales del país, de los cuales uno, el administrado por el Estado, monopoliza cables coaxiales de uso general y el empleo de repetidoras.

Desde hace años atrás sigue planteado el problema de la concesión de frecuencias y canales, los cuales, y a pesar de la necesidad nacional, no han llegado a concretarse en la medida mínima de los requerimientos.

Es bien sabido que la zona central de irradiación, Capital Federal, se encuentra en un ubicación de absoluta frontera, con un enorme río divisorio. Esta posición lleva a que nacionalmente se pier-

da parte de la influencia de las transmisiones, cosa más notable en televisión; donde se deben emplear sistemas de direccionalidad en las antenas irradiantes para reforzar la llegada del alcance de la imagen al interior de la provincia y zonas cercanas. El resto del país carece de cobertura necesaria en cuanto a radiotelefonía y televisión, cosa de valor estratégico de defensa.

Hay zonas de debilidad casi total. En fronteras, por ejemplo litoral y norte, "entran" cantidad de emisoras extranjeras y algunas, según se afirma, en frecuencias otorgadas a la R. Argentina por los convenios internacionales. Estas estaciones trabajan con gran volumen de publicidad argentina y llegan en idioma que en algunos casos es extraña mezcla de extranjerismos y localismos. Esto además, prueba la gran recepción que gozan en nuestro país y por ende el gran mercado que existe para estaciones argentinas.

Algo semejante ocurre en la Capital Federal; pero influyendo otro tipo de interés por parte del público que es "la libertad de expresión"; con emisoras del Uruguay, las que en caso de dificultad interna, malestar o posibilidad de desequilibrio político o social ocupan el primer lugar en la información argentina, el manejo de la opinión pública y hasta en el destino de los problemas internos.

Estas emisoras, y todas las que como ellas nos llegan del extranjero por conducto directo de ingreso sin convenciones mutuas internacionales y no puedan ser "cubiertas" (por amigos que los países y sus gobiernos sean de nosotros) no dejan de ser estratégicas, y con este concepto se las debe reconocer, lo que obli-

ga, en razón de la defensa nacional, a crear un elemento de equilibrio o compensación e incluso de contraataque, dentro de nuestro territorio.

El número y ubicación de las emisoras en el país mantiene la infraestructura de varias decenas de años atrás, no habiendo sufrido modificación ni reestructuración y menos aún reacondicionamiento o renovación de equipos. Esta situación es artificial y se ha convertido en un elemento paralizante y destructivo, lentamente, de nuestra economía y progreso.

Un poco de recuerdo histórico nos puede aclarar algunos conceptos.

Durante años, muchos, nuestra radiotelefonía gozó de un relativo sistema de estabilidad legal. Se establecieron empresas transmisoras, se organizaron cadenas que pretendían cubrir, con el tiempo, todo el país y llevaban los programas de cabeceras a los centros del interior.

Tanto es así, que la radiotelefonía argentina creó un mundo fabuloso de leyendas y estrellas. Fue centro mundial de giras y sobre todo alcanzó su propia época de oro entre los años 1930 y 1940, pasando a ser una de las primeras del mundo y siendo proverbial su exacta continuidad de horarios, eficiencia de locutores y popularidad de los programas, llegando los broadcasters de esa época a ser personalidades dentro y fuera del país: S. Yankelevich, Dr. Fortunato Devoto, S. Mc Dougal, Sr. Bernoti, etc.

La fama que brindaba la radiotelefonía, el dinero que movilizaba y reportaba era tan grande, rápido y efectivo que se convirtió en una *real-meca* de ambiciones y magnates.

Luego de la Revolución de 1943, más específicamente luego de la organización por el gobierno de Perón de la Secretaría de Prensa, de Informaciones, y demás sistemas, se fue concretando con la radiotelefonía lo que ocurría con todos los demás medios de difusión y comunicación. Fue tomando el Estado intervención en ellos, tanto que en algunos casos, la mayoría, los permisionarios, em-

presas y directorios se vieron obligados, según sus propias declaraciones, a mal vender antes que sufrir las presiones y lógicas confiscaciones. Pasaron así a manos del grupo de gobierno, pero de una manera especial y aparentemente inexistente. No eran del Estado por medio de una secretaría o dependencia administrativa, sino del partido, por intermedio de una empresa o personas particulares cuya vinculación con el grupo central del gobierno era incuestionable.

La importancia del sistema en manos de un grupo gobernante o de influencia política había sido suficientemente probado en regímenes fuertes, centralizadores y, en especial, los esencialmente totalitarios.

No nos referiremos a la calidad de este período, pero sin mayor discusión se puede afirmar que las emisoras pasaron a ser portavoz incansable y permanente de la palabra y voluntad oficial.

En este período justamente las emisoras uruguayas, en especial "Colonia" y "Carve", pasaron a ser algo así como entes clandestinos del aire, entablando una guerra psicológica y publicitaria entre exilados y gobierno.

El sistema empleado por las autoridades se extendió a diarios, revistas y, en general, a todo medio de comunicación masivo, creándose un organismo fabuloso y poderoso, la Secretaría de Informaciones.

Los progresos quedaron estereotipados, estrangulados. Las necesidades, a criterio del gobierno, estaban cubiertas. No obstante era necesario instalar un canal de televisión. No sólo se debía escuchar el mensaje central, se lo debía ver; y la empresa de LR3 Radio Belgrano contrató la instalación de un canal en Buenos Aires en la frecuencia de canal 7.

Se lo instaló precariamente, como subsidiario de la emisora radial y por lo tanto, integrante del sistema que rápidamente completaría la "oficialización" por intermedio de los nuevos propietarios de la empresa.

Hasta aquí todo había seguido estancado, mejor dicho, retrocedido desde ha-

cía varios años. El único aparente progreso había sido la instalación precaria del canal 7, pero su férrea dependencia de Radio Belgrano anulaba su existencia. Dependencia a su vez desastrosa para la radio, ya que ella debía responder por los gastos ilógicos y fabulosos de un canal que nada tenía que ver con el sentido comercial y funcional de una empresa y sólo servía para andanzas artísticas de algunos influyentes amigos de políticos oficiales y gobernantes.

Sobreviene la Revolución que derroca al G. Perón y se crea el problema de: la recuperación patrimonial, las comisiones investigadoras, los interminables tráfalos legales, las interdicciones a personas y empresas vinculadas directamente a los derrotados, huida de los interesados y regreso de sus originales permisionarios y sobre todo, en la imposibilidad de dar solución urgente, legal y expeditiva a los juicios y reclamos por medio de defensores y apoderados de ambos grupos de reclamantes, surge la necesidad de organizar un nuevo sistema de dirección y explotación a esas empresas, ya que, en razón de la complicidad con sus detentadores se eliminó por acción oficial o por propia renuncia, al personal superior de emisoras y canal 7. Nace así lo que hoy en radiotelefonía y televisión se denomina "Comisión Administradora de radiodifusoras comerciales y LS 84 TV Canal 7", organismo que como su nombre lo determina, sólo tiene acción sobre las emisoras no oficiales y que fueron de particulares, pero que no tienen resuelto aún su estatus legal. Es decir, organismo de ámbito reducido y no como se llega a suponer, de posible acción sobre toda la radiotelefonía y televisión en el orden nacional, ni aún sobre Radio nacional o municipal alguna, las que por ley tienen su régimen propio.

No obstante, para aclarar más el panorama, debemos decir algo sobre qué es el sistema de "concesiones", cómo influye éste sobre el problema nacional que tratamos y la situación deficiente en

que estos medios sociales y culturales funcionan y actúan en el país.

Hay una diferencia esencial entre el dueño o propietario de un diario y el de una radio o canal.

En realidad, legalmente no existe el segundo; éste es sólo un concesionario del uso de una frecuencia de radiodifusión o de un canal de televisión. Sólo tiene licencia para operar en esa frecuencia.

En el periódico un señor es propietario y no sólo de las máquinas y edificios, sino de la idea, la explotación. Puede en realidad vender, enagenar, llamar nuevos socios y traer aportes de capital, nombrar ejecutivos indiscriminadamente, decir o no algo, cerrar el diario o periódico, no salir cuando lo crea conveniente, cerrar sus puertas en protesta por actos del gobierno, o salir con sus páginas en blanco. Es decir, ejercer sus atribuciones de dueño. El diario es suyo, se entiende dentro de los límites de la Constitución Nacional. Y es real la posibilidad de que en un mismo lugar puedan existir publicaciones en número infinito. La cantidad, es lógico, se regula automáticamente por el interés del público y las posibilidades financieras de la empresa.

En radiotelefonía y televisión no ocurre así. Quizá el haber experimentado la importancia e influencia del diario y el periódico sobre la formación y conducción de la opinión pública, junto con la saturación de la capacidad real del espacio, "éter", para ser vehículo efectivo de transmisiones, llevó al sistema internacional de las "licencias".

Convenciones internacionales establecieron para cada país una serie de bandas y frecuencias para ellas, con el fin de operar sin interferencias, en radiotelefonía primero y más tarde también en televisión. Es decir que se había comprobado la imposibilidad de transmitir simultáneamente en la misma frecuencia y la misma zona y que los alcances según las potencias no eran independientes o de superposición, produciéndose, si no se tenía esto en cuenta, la anulación, superposición o interferencias, por

lo que establecieron zonas exclusivas para transmitir en forma comercial de gran potencia; zona aficionado, de menor o baja potencia y para servicios públicos, defensa y códigos. Nos interesa el comercial. Dentro de éste, y para que hubiera suficiente garantía de operación, se establecieron pequeñas zonas de frecuencias y con una característica internacionalmente tabulada e inamovible, se distribuyeron a cada nación determinadas características. Por lo dicho se ve no es ilimitada la posibilidad de operar estos medios. Ocurre lo mismo con las llamadas ondas largas, cortas, microondas, etcétera.

Cada país debe distribuir sus frecuencias de radio y TV. Siempre reserva para el empleo oficial y de defensa algunas de ellas; y en los países como el nuestro, donde radio y televisión no son monopolio del Estado, como en muchos países de Europa y parte del mundo, se recurre al sistema de licitar la concesión de determinadas frecuencias y canales a empresas privadas.

Esto quiere decir que existe una limitación legal esencial con respecto a la prensa escrita con la clasificación especial de que radio y televisión son servicios públicos.

Los diarios y publicaciones periódicas no son concedidos o licitados por el Estado. Los medios que nos preocupan sí, y esta llamada a licitación, por lógica del sistema, exige condiciones, las que se encuentran contenidas en la reglamentación a la ley respectiva y en el pliego de la llamada. Por lo tanto esta licencia o autorización es temporaria y renovable periódicamente o caducable si no se cumplen los requisitos de la licitación. Por lo que sólo puede ser considerada una emisora como propiedad de alguien en cuanto a bienes y valores mobiliarios, fijos y equipos, pero desde un punto operativo público no existe más propietario de las frecuencias, canales, etc., que el Estado, quien autoriza el uso a determinado particular bajo condiciones de contrato.

La operación y fines de la empresa o

concesionaria, al igual que el origen de los capitales, nombres, actividades y bienes personales de los integrantes de la nueva sociedad, ejecutivos y directivos lo mismo que sus antecedentes y garantía física y moral son establecidos y autorizados por las condiciones de la misma licitación. Para más ampliar estos conceptos ver "Ley de Radiodifusión y Televisión"; en realidad decreto ley del Gobierno Provisional del Gral. Aramburu Nº 15.460 año 1957 en el capítulo V, art. 18 completo.

Esta misma ley establece que el Ministerio respectivo, por intermedio de "Conart" (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión), actuará sobre la forma, oportunidad y condiciones de estas llamadas a concurso. Art. 17 y tendrá ingerencia, según el Art. 16 de la ley citada, el mismo "Conart" en el cargo de supervisión e inspección de los servicios de radiodifusión y televisión y la promoción de su constante perfeccionamiento artístico y cultural.

Por su parte la inspección técnica de las emisoras estará a cargo del Ministerio de Comunicaciones, según la misma ley.

Este esbozo histórico y el recurrir a la Ley de Radiodifusión nos hace más evidentes aún el acerto inicial. Nos encontramos en un prolongado proceso de estancamiento al que no han logrado sacar las circunstanciales y parciales llamadas a concurso para conceder nuevas frecuencias y canales. Sigue sin solucionar el problema de las antiguas emisoras privadas, aunque algunas de ellas en verdad, fueron licitadas y entregadas.

Los problemas fundamentales subsisten: 1º) El Estado persiste en mantener en sus manos, y esto se entiende hasta el momento de redactar esta nota, de la forma más ineficaz posible administrativa, legal, económica y políticamente la explotación de algunas todavía importantes radioemisoras y canal 7 de Buenos Aires. Se estima casi en el 70 por ciento la parte de la radiotelefonía que se administra o dirige desde el Estado.

2º No se cumple con la necesidad urgente incluso con vista a la defensa nacional de cubrir al país con transmisiones de sonido e imagen, defender las fronteras o contrarrestar posibles efectos de transmisiones extranjeras, cosa ésta reclamada por el Art. 17 in fine de la ley 15.460/57 donde dice "deberá tenderse en esta forma a mantener el espectro de frecuencias correspondientes al país *constantemente* cubierto" y esto muy a pesar del sistema llamado de "preadjudicaciones" que en fin no adjudica nada o no da suficiente garantía oficial de su cumplimiento.

3º Se recarga sobre el presupuesto nacional, astronómicamente deficitario, un volumen que según datos de 1963 y sólo para el canal 7 sobrepasaría los 500 millones de pesos, y con el sólo fin de solucionar parte del desquicio administrativo, lo que sumado a cifras anteriores y de las radios, da mucho y a muchos que pensar.

El resultado es que el país en esto también no atina a salir de la maraña administrativa y legislación devoradora y decretófaga que lo consume. Es muy razonable el temor primero de las autoridades de la Revolución de que por uno de los tan frecuentes, fundadas y pingües argucias legales, las emisoras "recuperadas" para el país, volvieran a manos de sus antiguos dueños oficialistas aunque con otros nombres y por medio de otras empresas.

Pero los años pasan y ese temor oficial parece haberse convertido en un "modus operandi" de los distintos gobiernos, posteriores, constitucionales, de facto, y, formas especiales. ¿Es que se ha ido repitiendo el ansia de poseer medios de difusión a mano y dúctiles, que sintió el gobierno de Perón y la situación es mantenida por otros conductos en forma similar y estacionaria? El Estado maneja y no siempre con visión empresaria sino política, a medios fundamentales que se han convertido así en algo extraño a sus fines y la ley.

El peligro existe. Considerado así, es el mismo miedo que el gobierno de Pe-

rón tenía de licitar emisoras. El peligro para la salud moral y económica del país es el mismo sea uno u otro el gobierno que así actúe; cada uno, con mejor o peor intención, no lo hace honestamente. El peligro no debe hacer replegar, por el contrario, se debe perfeccionar la ley y hacerla ejecutar.

En la práctica sigue en existencia la "Comisión Administradora...". El origen y vida de este organismo depende de la existencia de radioemisoras y canales de TV con problemas legales no resueltos que deban seguir siendo administrados por el Estado, lo que puede llegar a configurar una verdadera aberración legal ya que en la práctica y al correr el tiempo es una especie de confiscación disimulada.

Si estas emisoras han pasado a ser por derecho de ley, convenio, contrato o venta, cosa pública, el pueblo debe saberlo y entonces es acción de dicha "Comisión..." su dirección, dándole estructura legal y organización comercial para ello.

Si estas emisoras no son bien público porque la ley no puede dictar sentencia contra anteriores permisionarios, queda agotar los juicios particulares y acatarlos, o dictar ley de caducidad de licencias, comprar el Estado los bienes físicos y explotarlos, o a su vez licitar las ondas y/o vender, y/o licitar también el uso de los equipos. Pero se debe salir perentoriamente de un sistema monstruoso en una democracia donde existen enormes intereses y fundamentales medios de opinión, navegando pendientes de avatares políticos, influencias de funcionarios y pependencias electorales o de grupos de presión.

Por otro lado existe un organismo legal. Surgido no de una necesidad circunstancial político-legal, sino de una necesidad de orden orgánico, administrativo nacional, como es el "Conart", su acción no es en el aspecto administrativo de efecto sobre las emisoras dependientes de la "Comisión...". Quizás el problema sea, si sobre ellas tiene la ac-

ción común que le compete sobre todas las emisoras del país.

Juzgamos que es oportuno repensar todo lo dicho porque no es la falta de organismos especializados lo que nos falta. Ha sido evidentemente otra cosa que no atinamos a afirmar certeramente.

Muchos problemas fundamentales al país se plantean no más allá del plano político partidario. No entran al ámbito de la Nación, y los intereses evidentes de sectores pugnantes priman horrorosamente juntamente con el enorme temor a la superioridad del adversario, antes que sobre el bien supremo general.

Es claro verlo en este problema planteado. Algunas, sólo algunas emisoras se han licitado y concedido. Nuevos canales, emisoras del interior y repetidoras fueron licitadas. Todos realizaron estudios, se formaron empresas, se viajó, se pagaron estudios, presentaron pliegos pero, siempre algo ocurre y la postergación es la última respuesta y el recurso supremo. Sólo ganan en esto los funcionarios que cobran sus sueldos.

El país pierde. Pierde dinero y posibilidades. Queda autovarado en la carrera por el futuro y tanto que nos asombra el ver fotografías y recibir noticias de lo que creíamos todavía ser países salvajes de África o Asia... El país pierde prestigio fuera de sus fronteras y lo peor aún, pierde seguridad en sí mismo, en su capacidad de reacción y defensa ante la maraña de lo ilegal

y en la posibilidad de defender su propia libertad legal y justamente.

Hay muchos y antagónicos intereses en nuestro país. Es evidente. Nos encontramos, conscientes o no, dentro de un proceso de evolución que quizás en algunos casos escape a nuestro control y en algunos aspectos a nuestra capacidad de percibirlo. No nos definamos país subdesarrollado, en desarrollo o cosas así. Lo que importa es que un proceso así es irreversible. O se trata de organizarlo, influir sobre él, configurarlo, o lo más seguro es que nos arrollará y superará.

Sobre el proceso nacional hay muchos intereses. Consideramos que todos los intereses existentes dentro del país se vuelcan necesariamente sobre el proceso total y en forma práctica y activa sobre el Gobierno Nacional. Por sobre todo interés está el bien común nacional. El gobierno debe saber resolver los problemas al país, no a los grupos. El problema de la radiotelefonía y la televisión es uno de ellos y muy importante, casi en algunos aspectos, fundamental. No es resolverlo el dilatarlo.

Quizás una solución que no sea la ideal, pero se acerque a ella, sea la justa, aunque el miedo o prevención del gobierno se pueda comparar al que tiene el hombre de la calle por el mañana de él y su familia, y justamente por la quietud e indecisión de los gobernantes ante los problemas fundamentales que lo acosan. ♦